

CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el
Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas

OEA/Ser.K/XVI
GT/DADIN/doc. 339/08
12 mayo 2008
Original: español

INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LA
UNDÉCIMA REUNIÓN DE NEGOCIACIONES PARA LA BÚSQUEDA DE CONSENSOS

(Estados Unidos, Washington D.C.– del 14 al 18 de abril de 2008)

INFORME DEL PRESIDENTE

I. MANDATO

La Undécima Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se celebró en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, del 14 al 18 de abril de 2008, de conformidad con la resolución AG/RES. 2294 (XXXVII-O/07) mediante la cual se renovó el mandato para que el Grupo de Trabajo continúe sus Reuniones de Negociación para la Búsqueda de Consensos con el fin de culminar la redacción del Proyecto de Declaración con base en el documento “Registro del Estado Actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (GT/DADIN/doc.301/07) y tomando en consideración el “Compendio de Propuestas de Negociación para la Búsqueda de Consensos celebradas por el Grupo de Trabajo” (GT/DADIN/doc.255/06 rev. 2 y add.1) y los demás documentos pertinentes del Grupo de Trabajo.

II. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Cónclave de los Pueblos Indígenas se realizó en Washington D.C, Estados Unidos, los días 12 y 13 de abril de 2008 y contó con la participación de representantes y expertos.

El encuentro tuvo como objetivo la búsqueda de consensos entre los diversos representantes indígenas del Norte, Centro y Sur América, así como los del Caribe. En dicho cónclave participaron los representantes apoyados con recursos económicos del Fondo Específico establecido para la redacción de la Declaración Americana, así como otros representantes indígenas que autofinanciaron su participación.

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA

La agenda y el calendario para la Undécima Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos, fueron aprobados por la CAJP (Comisión de Asunto Jurídicos y Políticos) durante la reunión celebrada el 27 de marzo de 2008. Tanto la agenda, publicada como documento GT/DADIN/doc.331/08 rev 2, como el calendario, enuncian los cinco temas principales objeto de discusión.

IV. SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS O LÍDERES INDÍGENAS POR LA JUNTA DEL FONDO ESPECÍFICO PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Junta de Selección del Fondo Específico, reunida el 20 de marzo de 2008 e integrada por: Azelene Inácio, miembro indígena de la Junta de Selección por Suramérica; José Carlos Morales, miembro indígena de la Junta de Selección por Centroamérica y el Caribe y Beverley Jacobs, miembro indígena de la Junta de Selección por Norteamérica, el Embajador Reynaldo Cuadros

Anaya, Representante Permanente de Bolivia ante la OEA y Presidente del Grupo de Trabajo; Luís Exequiel Alvarado Ramírez, Ministro Consejero, Representante Alternativo de Nicaragua ante la OEA y Vicepresidente del Grupo de Trabajo - adoptó las decisiones de acuerdo con las resoluciones del Consejo Permanente de la OEA CP/RES. 817 (1319/02) y CP/RES. 873 (1459/04), mediante las cuales, respectivamente, se crea dicho Fondo Específico y modifica su funcionamiento.

En tal sentido los candidatos elegidos se presentan a continuación:

Argentina: Sandra Paineofilu
Belice: Anita Tzec
Bolivia: Ramiro Galindo Chávez
Brasil: Ubiratan de Souza Maia
Canadá: Ronald Lameman
Chile: Magdalena Choque Blanco
Colombia: Jaime Arias Arias
Costa Rica: Alancay Morales Garro
Dominica: Charles Williams
Ecuador: Teresa Jimbicti Pandama
El Salvador: Raúl Muzo Crespín
Estados Unidos: June L. Lorenzo
Guatemala: Juan León Alvarado
Honduras: Santiago Flores Rosales
México: Adelfo Regino Montes
Nicaragua: María Hazel Lau
Panamá: Héctor Huertas González
Paraguay: Alberto Vásquez Ayala
Perú: Irinea Bardales Díaz
San Vicente y las Granadinas: Oswald Robinson

El resultado del proceso de selección de líderes y expertos indígenas fue publicado en el Boletín Informativo número 3. Del grupo de representantes seleccionados, uno no pudo participar en las reuniones en Washington.

Cabe señalar que el gasto de participación de los representantes seleccionados para la Undécima Reunión y de los tres miembros de la Junta de Selección fue cubierto por el Fondo Específico.

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

B. Metodología

La Undécima Reunión de Negociaciones se llevó a cabo bajo la metodología contenida en el documento (GT/DADIN/doc.246/06 rev.7), metodología aprobada por el Grupo de Trabajo y los Representantes de los Pueblos Indígenas en noviembre de 2007 .

Adicionalmente, enriqueció la reunión de negociación, la incorporación de presentaciones con referencia a temas específicos y la presencia de algunos invitados especiales.

C. Documentos

Los participantes en la Décima Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos contaron con los siguientes documentos: Temario GT/DADIN/doc.331/08 rev. 2, Calendario GT/DADIN/doc.332/08 rev. 2, Registro del Estado Actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Rublos Indígenas GT/DADIN/doc. 301/07 rev 1, Compendio de Propuestas de las Nueve Reuniones de Negociación para la Búsqueda de Consensos Celebradas por el Grupo de Trabajo GT/DADIN/doc.255/06 rev. 2, Compendio de Propuestas de la Décima Reunión de Negociación para la Búsqueda de Consensos GT/DADIN/doc.255/06 rev. 2 add.1, Determinación de Elementos que podrían Facilitar el Consenso , Metodología GT/DADIN/doc.246/06 rev. 7, Nota informativa presentada por Naciones Unidas GT/DADIN/doc. 333/08.

D. Participantes

La lista de los participantes de los representantes de Estados Miembros de la Organización, así como la de los pueblos indígenas hace parte de los anexos de este informe.

E. Sesión Inaugural

La sesión inaugural se celebró el 14 de abril de 2008 con la tradicional oración indígena. Hicieron uso de la palabra el Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador de Bolivia ante la OEA, Reynaldo Cuadros, el Vice- presidente del Grupo de Trabajo, Ministro Consejero de Nicaragua ante la OEA, Luis Ezequiel Alvarado, en representación de los pueblos indígenas, el señor Armand Mac Kenzie y en representación de la Secretaría General, el Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador Albert R. Ramdin.

Algunas de las intervenciones hacen parte de los anexos de este informe.

G. Seguimiento del calendario:

Primera sesión

La primera sesión de trabajo se celebró el 14 de abril de 2008. Al iniciarse la consideración del calendario, GT/DADIN/doc.332/08 rev. 2, la Sra. Ana Peña delegada por el Perú sugirió reducir el tiempo previsto para el análisis de complementariedad del proceso dentro de la OEA con el de Naciones Unidas y aumentar el tiempo para la negociación de texto. Dicha sugerencia fue apoyada por el Cónclave Indígena. Bajo ese entendido se adelantó y acortó la presentación a cargo del Profesor S. James Anaya, invitado especial, para iniciar la apertura del diálogo sobre la

complementariedad entre la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (presentación anexa)

La presentación del Profesor Anaya fue muy bien recibida entre los participantes, enriquecedora y orientadora, respecto al futuro de las negociaciones dentro del marco de la OEA. Su exposición abrió paso a una sesión de preguntas y respuestas en la cual participaron tanto representantes de los Estados Miembros como Representantes del Cónclave Indígena. Uno de los temas más destacados fue el interrogante sobre el papel que jugaría una “Declaración de las Américas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas” aprobada con posterioridad a la Declaración de Naciones Unidas. Para esto, el Profesor Anaya, en una explicación clara y objetiva, señaló la importancia de ubicar las características propias de la región y resaltarlas en la elaboración de la Declaración Americana. Así mismo, agregó que la Declaración de las Américas debe ser vista como complementaria y congruente frente a la Declaración de Naciones Unidas. El Profesor Anaya, fue enfático al manifestar que mediante la negociación no se crean nuevos derechos se trata es de promover y reconocer derechos existentes en el ámbito internacional.

De igual forma el profesor Anaya, destacó la necesidad de una reconciliación y una búsqueda de valores compartidos entre los pueblos Indígenas y los Estados, saludable para obtener una declaración sustancial, orientada hacia la implementación real de estos derechos, extensiva a asuntos urbanos, migratorios, políticos y culturales entre otros. Adicionalmente hizo hincapié en que ningún Estado negó el cuerpo de la declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas, por lo que se debiera evitar repetir ejercicios de disenso y buscar la complementariedad. Recomendó así mismo evitar un texto demasiado legalista y explorar puntos de consenso, contribuyendo así a la especificidad del ejercicio en la OEA

En este punto, la Delegación de Estados Unidos realizó una intervención en la cual expresó la posición del país frente al proceso de negociación y presentó una “Declaración de Principios de los Estados Unidos frente a los Derechos de los Pueblos Indígenas”, texto anexo al documento GT/DADIN/doc. 334/08.

Segunda Sesión

La segunda Sesión de trabajo se llevó a cabo en la tarde del 14 de abril de 2008. Se abordó el tema de la Presentación de sugerencias y comentarios como resultado de la Sesión de Reflexión celebrada del 26 al 28 de noviembre de 2007. La presidencia hace referencia a los documentos: “Sesión de Reflexión Resultados y Recomendaciones Presentados al Consejo Permanente el 28 de Noviembre de 2008 ” GT/DADIN/doc.324/08 rev. 1 y “Sugerencias Comentarios al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Conformidad a lo Solicitado por el Consejo Permanente”, CP/doc. 4263/08.

Iniciando la discusión de este tema, la delegación de Canadá realizó una intervención en la cual declaró su posición frente a la negociación. Dicha declaración consta como anexo del documento GT/DADIN/doc. 334/08.

Algunas delegaciones presentaron sus comentarios respecto a las posiciones adoptadas por Estados Unidos y Canadá. Entre ellas hubo quienes respetaron los motivos de estos dos países para

mantenerse al margen del proceso de negociación y hubo quienes vieron esto como una conducta que no se ajusta al interés del Grupo de Trabajo de realizar negociaciones donde participen todos los Estados Miembros en aras de un consenso.

La presidencia considera que la actitud de no obstaculizar el proceso de la Declaración por parte de Estados Unidos y Canadá debe destacarse pues en cierta forma facilita el consenso. Agradece que hayan adoptado una posición que permita avanzar en el texto y confía en que el resultado de ésta decisión sea satisfactorio. No obstante la reserva expresada, espera recibir aportes y contribuciones de ambas delegaciones a lo largo de la negociación y exhorta a que finalmente se incorporen plenamente.

Tercera Sesión

Esta sesión de trabajo se llevó a cabo el 14 de abril de 2008. Durante este segmento se trató el tema de la definición del método para introducir el análisis de la complementariedad de textos al proceso de negociación.

Después de una amplia discusión a cerca de cual debería ser la forma más adecuada de proceder con la negociación del documento. Se concluyó que en muchos casos era necesario simplificar la redacción del texto y hacer que se adecue a su naturaleza, es decir, a una “declaración” y no un “tratado”. Esta conclusión fue unánime y el ejercicio a partir de ello buscó expresiones más sencillas y declarativas para los textos.

Teniendo en cuenta la costumbre que se empleó en las negociaciones anteriores de iniciar los trabajos a partir del artículo en el cual se había quedado en la reunión anterior, se propuso en adelante, negociar primero artículos de más fácil consenso, que debieran venir acordados en consultas informales previas para abreviar el tiempo de las sesiones plenarias y hacerlas más efectivas. Todas estas sugerencias demostraron su eficacia en el curso de las negociaciones.

Una vez presentados, el documento presentado por la Oficina de Derecho Internacional GT/DADIN/doc. 329/08 rev 1 y la propuesta del Cónclave, se concluyó que era viable adoptar esa propuesta para el desarrollo de la negociación en esta reunión.

Cuarta Sesión (Negociación)

No obstante la conclusión de la tercera sesión, el conclave sugirió hacer un ejercicio de avance con el artículo 17 párrafo 5, donde había terminado la Décima Reunión de Negociación para la Búsqueda de Consensos, pues los participantes habían venido preparados a negociarlo. Después, se procedería como se acordó..

El día 15 de abril inició con una presentación del Proyecto AMAUTA por parte del Sr. Michel Bergeron, Director del Departamento de Ciencia y Tecnología. El proyecto AMAUTA es una propuesta conjunta con el gobierno de Bolivia para proveer un escenario de aplicación del reconocimiento a los derechos indígenas, mediante la creación de territorios indígenas, sustentables, con energías renovables, cultivos orgánicos, eco-turismo y otros que permiten el equipamiento ecológico de comunidades prósperas y autosuficientes. La intervención expresada por el Sr. Bergeron consta como anexo de este informe.

La sesión de la mañana y parte de la tarde de este día se concentró en una discusión respecto a las posiciones presentadas por las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. Después de una Declaración del Cónclave Indígena que consta en un anexo de este informe, varios representantes de los Estados Miembros manifestaron sus inquietudes sobre cómo debería entenderse la posición de estos dos Estados y cuál sería el impacto real de su participación solo hasta el final del proceso de negociación.

Al finalizar la tarde del 15 de abril se empieza la discusión del artículo XVII numeral 5. Ante la falta de consenso, y dada la presentación de propuestas distintas, el Presidente propuso la conformar un grupo de trabajo de redacción informal para la búsqueda de un texto alternativo que acomode las preocupaciones de los gobiernos y de los pueblos indígenas en torno al artículo en cuestión. Con esto se dió por terminada la reunión por ese día.

El día 16 de abril, al comienzo de la sesión, el Cónclave anunció que aunque no habrían llegado a un consenso aún frente al artículo XVII, estaban muy cerca de lograrlo y por lo tanto solicitó más tiempo para presentar una propuesta final.

En tal sentido se abordó la discusión del artículo XVIII. Después de una extensa discusión se aprobó el numeral 1. Este fue un aporte sustancial puesto que incorporó un *item* esencial de la cosmovisión indígena, que es el concepto del derecho a la salud espiritual y a tener sus propias maneras de bienestar físico, mental y espiritual. Previamente las Naciones Unidas no hablaban de salud espiritual y condicionaban este bienestar a “estándares internacionales”, que obviamente se producen sin aquiescencia de los pueblos indígenas. Esto permite la revalorización de las culturas ancestrales. Esto permite que en ámbito de la OEA se produce una reivindicación indígena importante y que puede influenciar otros procesos a nivel mundial.

Ante la dificultad de llegar al consenso en el resto de numerales, se tomó la decisión de iniciar, a partir de este punto, el proceso de abordar primero aquellos artículos en los cuales pareciera más fácil llegar al consenso. En ese orden de ideas, se discutieron, los artículos: XXXIII, XXXVI y XXXIX. Los tres fueron aprobados por unanimidad, en su totalidad

En la sesión de la tarde del día 16, se solicitó al cónclave que presentara al grupo de trabajo los artículos donde encontrara más fácil consenso, por lo que se discutieron los artículos II, V VIII de los cuales los dos primeros fueron aprobados. La negociación del artículo VIII quedó pendiente para el siguiente día.

Las negociaciones se reanudaron el día 17 de abril, con la discusión del artículo VIII, pero no fue alcanzado el consenso. La presidencia estima que se debió a la falta de un acuerdo vía consultas informales. En seguimiento del orden establecido, se procedió al estudio del artículo XI. La discusión de este artículo fue suspendida mientras los representantes de de los Estados Miembros y Pueblos Indígenas participaron de la Cátedra de las Américas.

En esta ocasión, la Cátedra estuvo dedicada al tema “Los Pueblos Indígenas y su Contribución al Sistema Internacional de Derechos Humanos”, a cargo del Profesor James Anaya. Esta Cátedra fue sustancial por la gran acogida por parte de los Estados quienes comprendieron mejor la importancia de la presencia indígena a través de una representación destacada, subrayando el beneficio para la humanidad del reconocimiento de los derechos humanos colectivos, relacionados a sus tierras, el mantenimiento y desarrollo de sus culturas. También hizo notar que el no reconocimiento de estos derechos se transforma en inequidades que minan las democracias y la preservación del estado de derecho. Los pueblos indígenas contribuyen a que la soberanía del Estado esté al servicio de la paz,

estabilidad y coexistencia de pueblos diversos. Citó la Gran Ley de la Paz de los Haudenasoune, como una manifestación del más alto nivel de optimismo en el potencial por un orden global justo y pluralista.

En la tarde del día 17 de abril, después de la Cátedra se reanudó la negociación del artículo XVII. Ante la falta de consenso, el Presidente propuso conformar nuevamente un grupo de trabajo de redacción informal para la búsqueda de un texto alternativo. Con esto se dió por terminada la reunión de ese día.

El día 18 de abril, se da inicio a la sesión con la discusión del artículo VIII, del cual se aprobó el numeral 1. Por último en la fase final de la negociación, se retomó la discusión sobre los artículos XI y XVII. En esta oportunidad el artículo XI fue aprobado y del artículo XVII se aprobó el numeral 1.

En conclusión, seis artículos fueron aprobados en su totalidad y dos parcialmente, lo cual demuestra fehacientemente la eficacia de la propuesta de la presidencia.

Quinta Sesión

En esta sesión, que se llevó a cabo en la tarde del día 18 de abril, el Presidente del Grupo de Trabajo manifestó su intención de que los presentes participaran con aportes y comentarios encaminados a la elaboración de la resolución que se presentará a la Asamblea General. Después de oír a representantes del Los Estados Miembros y de los Pueblos Indígenas se pudo identificar la coincidencia en 4 elementos importantes a ser tenidos en cuenta en la resolución y en proceso de negociación para el próximo período:

- Realizar una sesión especial con miras a la reflexión y reevaluación del proceso
- Revisar la metodología de las negociaciones
- Tener al menos dos sesiones más de negociaciones
-
- Evaluar las consecuencias de las reservas de EU y Canadá

Con esto se dio por terminada la sesión.

Sexta Sesión

La Undécima Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos se dió por terminada con la lectura de una Declaración de Clausura por parte del Sr. Jaime Arias, representante del Cónclave Indígena, la cual se anexa a este informe y una oración, realizada también por un miembro del Cónclave.

VI. DOCUMENTOS PUBLICADOS AL CONCLUIR LA DÉCIMA REUNIÓN

Los documentos publicados al concluir la reunión son el “Registro del Estado Actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, GT/DADIN/doc.

334/08 y el “Compendio de Propuestas de Negociación para la Búsqueda de Consensos celebradas por el Grupo de Trabajo” GT/DADIN/doc.255/06 add. 2 rev.1.

VII. RECONOCIMIENTO

Agradecimientos a las contribuciones para la celebración de la Undécima Reunión de Negociaciones

El presidente presenta su agradecimiento y reconocimiento a todas las delegaciones participantes, así como al personal de la Secretaría General, a la Oficina de Cumbres, al Departamento Jurídico y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su efectiva contribución a la realización de la Undécima Reunión de Negociaciones.

Embajador Jorge Reynaldo Cuadros
Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el
Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

UNDECIMA REUNION DE NEGOCIACIONES PARA LA BUSQUEDA DE CONSENSOS

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL PROYECOT DE DECLARACION AMERICAN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

LISTA DE PARTICIPANTES DE REPRESENTANTES DE LAS MIOSNES PERMANENTENS ANTE LA OEA

MISION PERMANENTE ANTE LA OEA	REPRESENTANTE	TITULO
Argentina	Martín Goméz	Ministro, Representante Alterno
Bolivia	Embajador Reynaldo Cuadros William Torrez Marco Valverde	Embajador, Representante Permanente Ministro Consejero Segundo Secretario
Brasil	Marcos Campos	Consejero, Representante Alterno
Canada	Paul Gibbard Keltie Paterson	Director, "Aboriginal and Circumpolar Affairs Division, Foreign Affairs and International Trade Canada" Primera Secretaria, Representante Alterna
Chile	Christian Rehren	Ministro Consejero, Representante Alterno
Colombia	Juan Claudio Morales	Consejero, Representante Alterno
Costa Rica	Danilo Gonzalez	Ministro Consejero, Representante Alterno
Ecuador	Elizabeth Moreano	Consejero, Representante Alterno
El Salvador	Carlos Acosta	Consejero, Representante Alterno
Estados Unidos	Sarah Hankins	Representante Alterna
Guatemala	Elsa de González	Tercera Secretaria, Representante Alterna
Guayana	Deborah Yaw	Primera Secretaria, Representante Alterna
Honduras	Embajador Carlos Sosa Guadalupe Carias	Embajador, Representante Permanente Consejero, Representante Alterno
México	Alonso Martínez	Segundo Secretario, Representante Alterno

	Luis Javier Campuzano	Ministro, Representante Alterno
Nicaragua	Embajador Denis Ronaldo Moncada Luis Exequiel Alvarado	Embajador, Representante Permanente Ministro Consejero, Representante Alterno
Panamá	Embajador Aristides Royo Guillermo Jean	Embajador, Representante Permanente Consejero Económico, Representante Alterno
Paraguay	Sonia Quiroga	Primera Secretaria, Representante Alternas
Perú	Ana Peña	Ministerio de Relaciones Exteriores
República Dominicana	Francisco Cruz	Consejero, Representante Alterno
República Bolivariana de Venezuela	María Eugenia de los Rios	Primera Secretaria, Representante Alternas

* En algunos casos los delegados de algunas Misiones variaron en el curso de las reuniones. Por tal motivo es probable que todos los nombres no se hayan incluido en este listado.

UNDECIMA REUNION DE NEGOCIACIONES PARA LA BUSQUEDA DE CONSENSOS

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL PROYECOT DE DECLARACION AMERICAN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

LISTA DE PARTICIPANTES DE REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

País / Country	Nombre Pueblo/Organización Name of Group/Organization	Nombre / Name	Apellido / Last Name
Argentina	Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina	Sandra	Painefilu
Belice	Maya Institute of Belize - U'kuxtal Masewal	Anita Felicia	Tzec
Bolivia	Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC)	Ramiro	Galindo Chavez
Brasil	Coordenacao de Articulacao dos povos Indigenas das Regioes Sul e Sudeste do Brasil (COAPIRS) / Wara Instituto Indigena Brasileiro / Instituto KAME / Instituto dos Universitarios Indigenas Kaingang e Guarani (AUIKG)	Ubiratan	de Souza Maia
Brasil	Warã Instituto Indígena Brasileiro	Azelene	Inácio
Brasil	Warã Instituto Indígena Brasileiro	Azelene	Inácio
Canada	Native Women's Association of Canadá (NWAC)	Beverley	Jacobs
Canada	Confederacy of Treaty 6 First Nations, Canada	Ronald	Lameman
Canadá	Enlace Continental de las Mujeres Indigenas de las Americas (pertenece a Femmes Autochtones du Québec Inc. / Quebec Native Women Inc. (QNW) / Federacion de Mujeres Indigenas de Quebec)	Ellen	Gabriel
Chile	Comisión Aymara del Medio Ambiente (CADMA) de las provincias de Arica y Parinacota	Magdalena	Choque Blanco
Colombia	Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)	Jaime Enrique	Arias Arias
Costa Rica	Kus-Kurá Sociedad Civil	Alancay	Morales Garro

Costa Rica	Kus-Kurá Sociedad Civil	José Carlos	Morales M.
Costa Rica	Kus-Kurá Sociedad Civil	José	Carlos Morales
Dominica	Carib Council	Charles	Williams
Ecuador	Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador (CONMIE)	Teresa	Jimbicti Pandama
Ecuador	ONUPOCH/AMICH	Veronica de Lourdes	Lligalo Maliza
El Salvador	Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS)	Raúl	Muzo Crespin
Estados Unidos	Pueblo of Laguna	June L.	Lorenzo
Estados Unidos	Native Women's Association of Canadá (NWAC)	Beverley	Jacobs
Estados Unidos	Foundation for Indigenous Americans of Anasazi Heritage	Dr. RaDine	Amen-ra Jennings
Estados Unidos	National Congress of American Indians / Native American Rights Fund	Kim	Gottschalk
Estados Unidos	La Defensoria Indigena ECUA-USA (DEPIEA)	Nicolas	Chango
Estados Unidos	La Defensoria Indigena ECUA-USA (DEPIEA)	Margarito	Esquino
Estados Unidos	La Defensoria Indigena ECUA-USA (DEPIEA)	Dr. Manuel	Ibañez
Guatemala	Asociación POP JAY	Juan	Leon Alvarado
Guatemala	ACADEC / Asociación de Apoyo a los Necesitados de un solo Corazón y Fe (ANECOF)	Daniel	Cutzal España
Guatemala	ACADEC / Asociación de Apoyo a los Necesitados de un solo Corazón y Fe (ANECOF)	Juan	Tino Jiatz
Guatemala	ACADEC / Asociación de Apoyo a los Necesitados de un solo Corazón y Fe (ANECOF)	Floro	Chipix Morales
Guatemala	ACADEC / Asociación de Apoyo a los Necesitados de un solo Corazón y Fe (ANECOF)	Maria Antonia	Quina López
Guatemala	ACADEC / Asociación de Apoyo a los Necesitados de un solo Corazón y Fe (ANECOF)	Ana	Gonzalez Jiatz
Guatemala	ACADEC / Asociación de Apoyo a los Necesitados de un solo Corazón y Fe (ANECOF)	Marvin	Geovany Muchuch Sanic
Guatemala	Asociación para el Desarrollo Rural del Departamento de Solola (ADERSO)	Antonia Marivel	Tumax Chavaioc
Guatemala	Asociación para el Desarrollo Rural del Departamento de Solola (ADERSO)	Luis	Julaj Pichiya

Guatemala	Asociación para el Desarrollo Rural del Departamento de Solola (ADERSO)	Melvin Orlando	Muchuch Mijangos
Guatemala	Asociación para el Desarrollo Rural del Departamento de Solola (ADERSO)	Diego	Leon Vicente
Honduras	Alianza Verde	Santiago	Flores Rosales
México	Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER)	Adelfo	Regino Montes
Nicaragua	Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA)	Dra. Maria Hazel	Lau Blanco
Nicaragua	Organización SUKAWALA	Marlene	Mendez Olivas
Panamá	Congreso General Kuna de Madungandi	Héctor	Huertas González
Paraguay	Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI)	Alberto	Vázquez Ayala
Perú	Organizacion de Mujeres Indigenas Kakataibas de la Amazonia Peruana (OMIKAP)	Irinea	Bardales Díaz
Perú	Municipalidad de Centro Poblado de Sallahuachac	Andres / Jaime vladimir / Soler Agustin	Condori Ticono / Osoreo Romero / Inga Casimiro
Perú	Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú (COICAP)	Delcy	Calsina Huarsaya
Perú	Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú (COICAP)	Sherly Jacqueline	Avalos Meza
Perú	Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú (COICAP)	Karim Paola	Loyola Rodriguez
San Vicente y las Granadinas	The National Garifuna Council of Saint Vincent and the Grenadines and the World Garifuna Organisation	Oswald	Robinson
United States	Native American Rights Fund/National Congress of American Indians	Kim Jerome	Gottschalk
	Interpreter	Charlie	Roberts
	Interpreter	Cassandra	Smithies
	Interpreter	Colleen	Reeks

**DECLARACIÓN DE APERTURA DEL CONCLAVE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
XI REUNIÓN DE NEGOCIACIONES PARA LA BÚSQUEDA DE PUNTOS DE
CONSENSOS
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
14 DE ABRIL DE 2008**

Reciban nuestros saludos respetuosos, Sr. Presidente y los delegados de los Pueblos Indígenas y de los estados.

Tomo la palabra a nombre de Conclave de los Pueblos Indígenas que participa en esta 11 sesión de Negociaciones sobre el Desarrollo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que cuenta con la representación de los Pueblos Indígenas de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Agradecemos a la Secretaría de la Cumbre de las Américas y a los donantes por todo su apoyo para asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en esta sesión.

Acudimos a esta sesión con el entusiasmo renovado por los acontecimientos significativos para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas en el campo internacional.

Reafirmamos que en el Informe del Presidente sobre la Sesión de Reflexión sobre las Reuniones de Negociación para la Búsqueda de Consensos (OEA/Ser.K/XVI GT/DADIN/doc.321/08) plantea que “La mayoría de los Estados y todos los representantes indígenas apoyaron el uso de la Declaración de la ONU como base de negociaciones e indicaron que esto representaba un estándar mínimo para la Declaración de OEA.”

Cuando sesionamos en noviembre de 2007, acordamos llevar a cabo un análisis comparativo de los textos actuales del Proyecto de la Declaración Americana y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Este acuerdo se basó sobre el reconocimiento amplio que la Declaración de la ONU es ahora el estándar internacionalmente reconocido sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Reafirmamos que el trabajo sobre el Proyecto de la Declaración Americana se debe avanzar bajo los siguientes principios:

- 1) Nada en la Declaración Americana puede menoscabar los estándares establecidos en la Declaración de la ONU – es decir, la Declaración de la ONU constituye un estándar mínimo y, de acuerdo con los principios jurídicos internacionales, un instrumento regional no puede ir por debajo de los estándares reconocidos en este documento universal.
- 2) La Declaración Americana puede desarrollar los estándares establecidos por la Declaración del ONU e incluir una articulación más detallada de los derechos específicos de los Pueblos Indígenas; y
- 3) Que las dos Declaraciones deben ser congruentes la una con la otra.

Nuestro trabajo sobre la Declaración Americana se debe llevar a cabo con la intención de reiterar y reforzar, los temas y aspectos claves de la declaración de la ONU. Estos incluyen, entre otros, los derechos de los Pueblos Indígenas a la libre-determinación, el consentimiento libre, previo e informado y a las tierras, territorios y recursos tradicionalmente poseídos y utilizados.

Distinguidos Delegados de los Pueblos Indígenas y de los Estados, el proceso de la OEA nos da una oportunidad única para afirmar y consolidar las disposiciones y derechos en la Declaración de la ONU, y a profundizar en ellos, respondiendo a las necesidades y preocupaciones particular de los Pueblos Indígenas de las Américas. Los Pueblos Indígenas tenemos mucho que ganar trabajando conjuntamente en el espíritu de cooperación, buena fe y como socios plenos con los estados americanos para desarrollar una contundente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y lograr su aprobación lo más rápido posible.

No podemos aceptar ser partícipe de un proceso que busca socavar lo que ya hemos logrado en el campo internacional.

Felicitemos a los Estados tales como Bolivia, y las cortes tales como la Corte Suprema de Belice que ya han aprovechado la Declaración de la ONU para avanzar la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas en sus respectivos países.

Reconocemos que de los 34 estados miembros de la OEA, solamente los Estados Unidos y Canadá votaron en contra de la Declaración de la ONU, y Colombia se abstuvo. Como resultado, estos estados toman la posición que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no se les aplica y que, por lo tanto, no se deben utilizar como un estándar mínimo en estas negociaciones. Sin embargo, hacemos ver a este grupo de trabajo que hay dos acontecimientos que demuestran que esta posición no es válida.

El 7 de marzo de 2008, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación (CERD) emitió sus recomendaciones en respuesta al Informe Periódico de los Estados Unidos que fue entregado al Comité el año pasado. El CERD recomendó que los Estados Unidos aproveche la Declaración de la ONU como “una guía para interpretar las obligaciones con los Pueblos Indígenas de los Estados Partes bajo el Convenio.” Esta recomendación apoyó la posición de los Pueblos Indígenas y una amplia gama de expertos en derecho internacional y vincula la implementación de la Declaración de la ONU a las obligaciones vinculantes de todos los Estados Partes al Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial incluyendo aquellos estados que votaron en contra de la Declaración de la ONU, como los Estados Unidos.

Además, el martes 8 de abril de 2008, la Cámara Baja de Canadá aprobó una moción haciendo un llamado al Gobierno de Canadá a “avaluar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tal como se aprobó por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 y que el Parlamento y el Gobierno de Canadá implementen plenamente los estándares contenidos de la misma.”

Hacemos un llamado al Gobierno de Canadá a implementar plenamente esta moción democráticamente aprobada por su propio Parlamento y a revertir su oposición a la Declaración de la ONU en los foros internacionales, incluyendo este Grupo de Trabajo.

La Declaración de la ONU proporciona un nuevo marco para mejorar las relaciones entre los gobiernos y los Pueblos Indígenas del mundo en base del respeto mutuo. La Declaración Americana también puede convertirse en un nuevo marco histórico para los Estados y los Pueblos

Indígenas en las Américas según lo cual se afirman, se respetan y se velan por los derechos de los Pueblos Indígenas. Es claro que este nuevo marco es urgente y necesario porque los derechos y la sobrevivencia de los Pueblos Indígenas en todos los 34 estados miembros de la OEA siguen siendo violados. La imposición de “desarrollo” incluyendo minería y deforestación, la contaminación ambiental, la destrucción de la biodiversidad y los medios tradicionales de subsistencia, la violación de los tratados, la apropiación indebida de las tierras y recursos, la negación de los derechos culturales y la destrucción de los sitios sagrados, la militarización de las tierras indígenas, políticas que intentan extinguir los derechos de los Pueblos Indígenas y socavar su libre determinación, la reubicación forzosa y la variedad de otros impactos adversos están socavando la dignidad, seguridad y bienestar de los Pueblos Indígenas y, en muchos casos, su sobrevivencia como Pueblos propios.

Una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que sea contundente y fundamentada en principios va a ser otro paso muy importante y útil para proteger a los Pueblos Indígenas amenazados por las acciones de estados y otras partes.

En este sentido, es importante enfatizar que el consenso referido en el documento GT/DADIN/doc2461/06/rev.7 preparado para esta sesión sobre el procedimiento, para la conclusión de estas negociaciones, tiene que incluir a los Pueblos Indígenas, no solamente a los estados como actualmente propone. Solamente así se puede asegurar que el proceso sea legítimo y que su resultado sea un éxito.

Hay una necesidad urgente y ya es tiempo para avanzar en nuestros esfuerzos, basados en los principios y preocupaciones que hemos presentados en esta declaración de apertura. Las sesiones del Grupo de Trabajo deben enfocarse en las negociaciones actuales del texto del Proyecto de la Declaración Americana para encaminar su pronta aprobación. Otros temas tales como el Plan de Acción, seminarios temáticos y la Oficina Permanente para los Pueblos Indígenas se pueden discutir en otros foros de la OEA fuera de las sesiones de negociaciones del Grupo de Trabajo.

Nos encontramos aquí presentes con un buen ánimo, para construir sobre lo que hemos logrado y para avanzar nuestras relaciones con los estados, bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado tal como se recomendó en el Plan de Acción del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo.

En este sentido, estamos en la mejor disposición a trabajar esta semana.

Muchas gracias.

**OPENING STATEMENT OF THE INDIGENOUS CAUCUS, 11TH MEETING OF
NEGOTIATIONS IN THE QUEST FOR POINTS OF CONSENSUS, ORGANIZATION
OF AMERICAN STATES
APRIL 14TH, 2008**

Respectful Greetings Mr. Chairman, and delegates of Indigenous Peoples and states.

I am making this statement on behalf of the Indigenous peoples' caucus participating in this 11th session of Negotiations for the development of the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in which Indigenous Peoples of North, Central, South America and the Caribbean are represented. We express our appreciation to the Secretariat of the Summit of the Americas as well as the donors for all the support they provided to ensure the participation of Indigenous Peoples in this Session.

We come to this session with renewed enthusiasm based on the significant developments in the International arena to recognize the rights of Indigenous Peoples.

We reaffirm that the Report of the Chair on the Session of Reflection on the meetings of negotiations for the search of the consensus (OEA/Ser.K/XVI GT/DADIN/doc.321/08) states that "The majority of States and all of the indigenous representatives supported the use of the UN Declaration as the baseline for negotiations and indicated that this represented a minimum standard for the OAS Declaration."

When we met in November 2007, we agreed to complete a comparative analysis between the texts of the Draft American Declaration which have been drafted to date and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as adopted by the UN General Assembly on September 13th, 2007. This agreement was based on broad recognition that the UN Declaration is now the internationally-recognized standard on the rights of Indigenous Peoples.

We reaffirm that work on the Draft American Declaration should proceed under the following principles:

- 1) Nothing in the American Declaration can fall below the standards set out in the UN Declaration – in other words the UN Declaration constitutes the minimum standard and, in accordance with international legal principles, a regional instrument cannot fall below the standards recognized in this universal document.
- 2) The American Declaration can build upon the standards set by the UN Declaration and include a more detailed articulation of the specific rights of Indigenous Peoples; and
- 3) That the two Declarations should be congruent with one another.

Our work on the American Declaration must be undertaken with the intention to reiterate and reinforce key areas and aspects of the UN Declaration. These include, among others, the right to self-determination, free prior informed consent and rights to traditionally owned and used lands, resources and territories.

Distinguished Indigenous Peoples' and states' delegates, in this OAS process we have a unique opportunity to affirm and build upon the provisions and rights in the UN Declaration, and to expand upon them in response to the particular needs and concerns of the Indigenous Peoples of

the Americas. Indigenous Peoples have a great deal to gain from working together in a spirit of cooperation, good faith and full partnership with states to develop a strong American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and to achieve its adoption as soon as possible.

We cannot agree to be part of a process that seeks to undermine what we have already achieved in the international arena.

We congratulate states such as Bolivia, and courts such as the Supreme Court of Belize which have already used the UN Declaration to advance the implementation of the rights of Indigenous Peoples within those countries. We call upon other states in the Americas to take similar steps without delay.

We recognize that of the 34 OAS member states, only the United States and Canada voted against the UN Declaration, and Columbia abstained. As a result, these states take the position that the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples does not apply to them and should therefore not be used as the minimum standard in these negotiations. However, we call the attention of this Working Group to two important developments which demonstrate that this position is not valid.

On March 7th 2008, the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) released its recommendations in response to the United States' Periodic Report submitted to the Committee last year. The CERD recommended that the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples be used by the US as a "guide to interpret the State Party's obligations under the Convention relating to Indigenous Peoples". This recommendation supports the position of Indigenous Peoples and a number of international legal experts, and ties the implementation of the UN Declaration to the legally binding obligations of all state parties to the Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, even states such as the US which voted against the Declaration's adoption.

In addition, on April 8th, 2008, the House of Commons in Canada passed a motion calling on the Canadian Government to "endorse the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as adopted by the UN General Assembly on 13 September, 2007 and that Parliament and Government of Canada fully implement the standards contained therein".

We call on the Government of Canada to fully implement this democratically-adopted motion by its own Parliament, and to reverse its continuing opposition to the UN Declaration in international fora, including this Working Group.

The UN Declaration provides a new framework for improved relations between the governments and the Indigenous peoples of the world, based on mutual respect. The American Declaration can also become such a historic new framework for States and Indigenous Peoples in the Americas whereby the rights of Indigenous Peoples can be further affirmed, respected and upheld. The urgent and critical need for this new framework is clear, as the rights and survival of Indigenous Peoples in all 34 member states of the OAS continue to be threatened and violated. Imposed development including mining and deforestation, environmental contamination, destruction of biodiversity and traditional means of subsistence, violation of Treaties, expropriation of lands and resources, denials of cultural rights and destruction of sacred sites, militarization of Indigenous lands, policies which attempt to extinguish Indigenous Peoples' rights and undermine their self-determination, forced removals and a variety of other adverse impacts are increasingly undermining Indigenous peoples' dignity, security and well being and in many cases, their survival as distinct Peoples.

A strong and principled American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples developed in partnership between the Indigenous Peoples and states of the Americas will be another very important step towards protecting Indigenous peoples who are facing grave threats as a result of actions by states and non-indigenous parties.

In this light, it is important to emphasize that the consensus referred to in document GT/DADIN/doc2461/06/rev.7 prepared for this session addressing the procedure for the prompt conclusion of these negotiations must include Indigenous Peoples and not just states as currently proposed. This is the only way to ensure that the process will be legitimate and its outcome a success.

The need is urgent and the time is now to move forward in our efforts, based on the principles and concerns presented in this statement. The Working Group sessions must be focused in actual negotiations on the Draft American Declaration text in order to move towards to its prompt approval. Other issues such as a Plan of Action, thematic seminars and a Permanent Office for Indigenous Peoples can be discussed in other OAS forums held apart from the Working Group's negotiation sessions.

We are here with a good spirit, to build upon what we have achieved and to advance our partnerships with states, under the principle of free prior informed consent as was called for in the Plan of Action of the 2nd International Decade of the Worlds Indigenous Peoples.

For all our relations.

**PALABRAS DE APERTURA DEL VICEPRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO
ENCARGADO DE ELABORAR EL PROYECTO DE DECLARACION AMERICANA
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**

Senor Secretario General Adjunto Albert Ramdim
Senor Representante del CAUCUS Indígena
Senor Presidente del Grupo de Trabajo
Distinguidos Representantes Permanentes y Alternos ante la OEA
Distinguidos Representantes del CONCLAVE Indígena

Al iniciarse los trabajos de la XI reunión para la búsqueda del Consenso sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, conviene recordar que aún continuamos con una deuda moral, política e histórica, para con los pueblos Indígenas del Continente, quienes conservan aún grandes expectativas acerca del cumplimiento de las obligaciones que como Estados tenemos en la promoción y protección de sus derechos.

En este sentido el Gobierno de la República de Nicaragua que preside el Presidente Daniel Ortega promueve una política destinada a profundizar los derechos de los Pueblos indígenas nicaragüenses, en el marco de las relaciones armoniosas, el fortalecimiento de los canales de comunicación, el respeto de sus culturas, tradiciones y formas de organización social, religiosa, política y cultural, para el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, y las libertades fundamentales.

Esta reunión requiere de un esfuerzo político serio y un marco de flexibilidad de todas las partes involucradas en la negociación para la búsqueda de un consenso con el objetivo de poder avanzar en la redacción de este documento. El retraso en el Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye una vergüenza no solo para esta organización, sino para sus Estados miembros. Este es el momento de la reivindicación para los pueblos indígenas de la Américas, no nos podemos quedar a la zaga de la historia.

Debemos trabajar en los elementos que nos permiten llegar al consenso, y que le dan una mayor consistencia al texto de la DADIN, destacando aquellos elementos que resaltan la identidad, la cultura, así como los aspectos multiétnicos, multilingües y pluriculturales del Hemisferio, lo que le da una característica especial a la DADIN.

Además presenta la oportunidad de llenar aquellas omisiones que en la Declaración de las Naciones Unidas no se mencionaron, y que pueden ser de validez y aplicación en el ámbito regional. La Declaración de la ONU sigue constituyendo un marco de referencia privilegiado para detectar aquellos puntos sobre los cuales ya hubo consenso en el ámbito universal, y que pueden ser adoptados con facilidad en el ámbito regional, y nos permita a la vez seguir trabajando en el texto de la OEA con mayor agilidad. En esta dirección el análisis comparativo entre la Declaración de la ONU y el proyecto de Declaración de la OEA contribuirá a allanar el camino de la negociación y a eliminar los temores de algunas delegaciones con respecto al tratamiento de este tema en el seno de este Grupo de Trabajo.

De igual forma el derecho internacional siguen siendo el estándar por el cual podemos seguir analizando y desarrollando el Proyecto de Declaración Americana.

Finalmente deseo expresar que la voluntad política del Gobierno de Nicaragua es de apoyar las negociaciones sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, insistimos en que debemos de acelerar este proceso de negociaciones y presentar resultados concretos a la próxima Asamblea General de la OEA a celebrarse en Medellín, Colombia.

**S. JAMES ANAYA
PALABRAS DE APERTURA
UNDECIMA REUNION DE NEGOCIACIONES APRA LA BUSQUEDA DE
CONSENSOS
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL PROYECTO DE
DECLARACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS**

Muchas gracias Sr. Presidente. Le felicito por su liderazgo y le deseo éxito en su labor como Presidente de este grupo de trabajo. Honorables delegados de los estados, representantes de pueblos indígenas, y otros participantes, it's an honor for me to have the opportunity to contribute to these discussions.

Adoption by the United Nations of its Declaration of the Rights of Indigenous Peoples provides a new context for negotiations on the text of an American or OAS declaration on the same subject. I believe we are at an historic moment at which indigenous peoples have become important participants in the international system after centuries of exclusion. The UN Declaration is an enormous achievement by indigenous peoples who for years have raised their concerns at the international level and demanded recognition of their rights. It is also an achievement for the international community of states which through the Declaration have come together in an understanding of those rights and in a pledge to take action to make those rights a reality when for so long and in so many places they have not been. An American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples can strengthen the recognition of indigenous peoples' rights and the programmatic commitment to see these rights implemented at the regional level.

I think that the discussion about the complementarity between UN declaration and the proposed American declaration is an extremely important one. The UN declaration is now a singularly important part of the body of existing instruments and norms that must be taken into account in these negotiations. And once adopted, an American declaration will live in an inevitable symbiosis with the UN declaration.

In order to enter this discussion of the relationship between the two instruments, I think it is useful to first reflect on the content and nature of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

With its 24 preambular paragraphs and 46 operative articles, the UN declaration is anchored in the mutually reinforcing human rights of equality and self-determination. On this grounding, the declaration affirms the collective rights of indigenous peoples in relation to culture, development, education, social services, and traditional territories; and it mandates respect for indigenous-state historical treaties and modern compacts.

The UN declaration does not define "indigenous peoples," but it makes clear who they are by emphasizing the common pattern of human rights violations they have suffered. The sixth preambular paragraph specifically grounds the Declaration in a concern that indigenous peoples have suffered from historic injustices as a result of, inter alia, their colonization and dispossession

of their lands, territories and resources, thus preventing them from exercising, in particular, their right to development in accordance with their own needs and interests ...

By alluding to this history at the outset, the Declaration reveals its character as essentially a remedial instrument. It is not privileging indigenous peoples with a set of rights unique to them. Rather indigenous peoples and individuals are entitled to the rights enjoyed by other peoples and individuals, although these rights are to be understood in the context of the particular characteristics that are common to groups within the indigenous rubric. Thus, Article 3 claims for indigenous peoples the same right of self-determination that is affirmed in common Article 1 of the widely ratified international human rights covenants as a right of “All peoples.” The goal of the Declaration is to remedy the historical denial of the right of self-determination and related human rights so that indigenous peoples may overcome systemic disadvantage and achieve a position of true equality.

Inclusion of the right of self-determination in the UN declaration was controversial, and it continues to raise concerns among some states that see it as a potential threat to the stability and integrity of existing political and territorial configurations. But I think it is increasingly evident that the principle or right of self-determination as applied to indigenous peoples is a human rights imperative that is a stabilizing instrument of reconciliation between indigenous peoples and the societies that have grown up around them. Implicit in the concept of self-determination are core values of freedom and equality that are relevant to all segments of humanity in relation to the political, economic, and social configurations with which they live. Attributes of statehood or sovereignty are at most instrumental to the realization of these values—they are not the essence of self-determination for peoples. As now made clear by the UN Declaration, “peoples” are transgenerational communities with significant attributes of political or cultural cohesion that they seek to maintain and develop. And for most peoples—especially in light of cross cultural linkages and other patterns of interconnectedness that exist alongside diverse identities—*full* self-determination, in a real sense, does not justify a separate state and may even be impeded by a separate state. It is a rare case in the post-colonial world in which self-determination, understood correctly from a human rights perspective, will require secession or the dismemberment of states. Thus, the text of the Declaration clearly presupposes that indigenous peoples, having been denied self-determination, will recover or develop it within the framework of the states in which they live, through contextually defined arrangements that accommodate to diverse realities.

With its remedial thrust, the Declaration contemplates change that begins with state recognition of rights of indigenous group survival that are deemed “inherent,” and that recognition is characterized as a matter of “urgent need.”¹ Accordingly, the Declaration generally mandates that States take appropriate measures, in consultation and cooperation with indigenous peoples, to achieve the ends of the Declaration,² and it further includes particularized requirements of special measures in connection with most of the rights affirmed. Such special measures are to be taken with the end of building healthy relationships between indigenous peoples and the larger societies as represented by the states. In this regard, “treaties, agreements and constructive arrangements between States and indigenous peoples” are valued as useful tools, and the rights affirmed in such instruments are to be safeguarded.⁷

The UN declaration articulates rights and the need for special measures in terms specific to indigenous peoples. But I believe it is important to see that the rights affirmed are simply derived

¹ Declaration, *supra*, preambular para. 6.

² Declaration, *supra*, Article 37.

⁷ *Id.*, preambular para. 13; Article 37.

from human rights principles that are of universal application. These include, in addition to principles of equality and self-determination as already stressed, other generally applicable human rights such as the right to enjoy culture, the right to health, right to life, and the right to property. All of these human rights have been affirmed in various human rights instruments as applicable to all segments of humanity. Indigenous peoples' collective rights over traditional lands and resources, for example, can be seen as derivative of the universal human right to property, as concluded by the inter-American human rights institutions, or as extending from the right to enjoy culture, as affirmed by the UN Human Rights Committee in light of the cultural significance of lands and resources to indigenous peoples. By particularizing the rights of indigenous peoples, the UN Declaration seeks to accomplish what should have been accomplished without it: that is, the application of universal human rights principles in a way that appreciates not just the humanity of indigenous individuals but that also values the bonds of community they form. The Declaration, in essence, recognizes for indigenous peoples rights that they should have enjoyed all along as part of the human family, it contextualizes those rights in light of their particular characteristics and circumstances, and it promotes measures by states and international institutions to remedy the historical and systemic violation of these rights. Thus, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples goes a long way in consolidating gains made by indigenous peoples toward rolling back historical and ongoing inequities and oppression, and in securing a future of self-determination.

So now an important question is: What is the purpose of a regional instrument in the form of an American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in light of the existence of the UN declaration. As these negotiations proceed, I think there needs to be clarity about the need or desirability of an American declaration in this new context. The situation is not as before the adoption of the UN declaration. The UN declaration is obviously an instrument that applies globally, including with regard to the American States and for the benefit of the indigenous peoples in the region. We can see domestic authorities in the American States, including judicial bodies, already applying the UN declaration, as in the recent judgment of the Supreme Court of Belize in the *Maya Villages* case. And the UN declaration is being invoked by the inter-American human rights institutions, as can be seen in the recent judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the *Saramaka* case. So why have an American declaration?

I think the answer is twofold. First, an American declaration can strengthen and provide regional focus to the international standards that are already applicable in the Americas, which include not just the UN declaration but also for many states ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples. At the meeting in November convened by the chair to reflect on the negotiation process, participants concluded that an American declaration should address the particular characteristics of indigenous peoples of the Americas and fill any gaps in those areas not addressed by the UN declaration.

Secondly, an American declaration can add to the impetus for states and regional institutions to take action individually and cooperatively that are in keeping with the international standards. Once adopted by the OAS General Assembly, the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples will be a primary point of reference for the inter-American institutions, including the Inter-American Commission on Human Rights, providing these institutions with greater authority, motivation, and guidance to address indigenous peoples concerns.

In that meeting in November to reflect on the negotiation process, the majority of the participants also agreed that the UN declaration should be used as a baseline and that it represents a minimum standard for the OAS Declaration. I believe this is a very important and justifiable position. The American declaration should build on the body of norms provided in the UN

instrument and certainly not articulate a lower standard. It is inconceivable, really, that the Organization of American States would adopt an instrument that would undermine or dilute the rights already recognized in the universal declaration, or that would otherwise make for a lower threshold of protection for indigenous peoples in the region. To do so would render the American declaration juridically and politically flawed in light of higher UN standards and create uncertainty about the scope of indigenous peoples' rights when in fact greater certainty is needed. Additionally, for the OAS to regress in this way would be against its strong tradition and record of progressive action in this field. The American institutions, especially the Inter-American Commission and Inter-American Court through their jurisprudence, have been at the forefront of the promotion and affirmation of indigenous peoples' rights.

Complementarity between the UN and an OAS declaration cannot mean an OAS declaration that takes rights in the UN declaration and diminishes them by limiting them to the domestic laws of states in the region or by some other device. This would not be complementarity but retrogression, a big step backwards in the progress that has been building over decades to advance indigenous peoples rights. National legal contexts are of course important, and they will and indeed must play important roles in the realization of indigenous peoples rights in ways that harmonize with the broader, legitimate interests of society. But the nature of human rights instruments is to set the standard for national laws and administrative practices to follow, not vice versa. Complementarity in this context instead should be understood to mean an American declaration that addresses the particular characteristics of indigenous peoples of the Americas to provide them greater, not lesser, protection.

On the other hand, I do not think that having an American declaration that complements the UN declaration in this way requires that the American declaration include all that is in the universal instrument. Even without including all that is in the UN declaration, the American Declaration can still play the important role of drawing attention to the concerns of indigenous peoples, instigating action to address those concerns, and guiding that action through standards that reinforce in the regional context international norms. And whatever the final text of the American declaration, the UN declaration will continue to apply. Among the few provisions for the text that – as I understand – are already approved is the article providing that “[n]othing in the Declaration may be interpreted so as to limit, restrict, or deny human rights in any way...” – this includes any applicable human rights found in the UN declaration. Additionally, the various substantive rights and obligations of the American Declaration can be drafted in a fashion so as not to otherwise suggest the absence of greater rights and obligations that are found in other instruments. Moreover, we can expect that the UN declaration where applicable will be used to inform understanding about the American instrument and vice versa, in accordance with whichever instrument is more expansive or protective of indigenous peoples' rights.

Related to the question of why there should be an American declaration, in addition to the UN one, is the question of how to achieve adoption of an American declaration with the desired characteristics. I am referring here to the question of how to reach sufficiently broad agreement on an acceptable text.

In order for an American Declaration on Rights of Indigenous Peoples to maximize its purpose and functions, it must enjoy the broad support of both the indigenous peoples of the region and OAS member states. Therefore, a goal of these negotiations is to achieve a consensus text that will be adopted by the OAS General Assembly without a vote as is the usual OAS practice for such matters. But this may seem to be a difficult goal to achieve. Each of us in the room knows that, even though an overwhelming majority of UN member states favored adoption

of the UN declaration, it was not adopted by consensus. Four states voted against it and eleven abstained. Two of the states that voted against the declaration and one that abstained are OAS members and parties to these negotiations. If the American Declaration were put to a vote and these same states were to vote against it or abstain, the effect would be proportionately greater than in the UN context, and thus the American declaration would from the outset be crippled much more so than the UN declaration was by the negative and abstaining votes. Achieving consensus on an American Declaration is thus very much a preferred route over a fractured vote. It seems to be widely understood that this is a different context than that of the UN and that in this context consensus in the end is an imperative, however difficult it is to achieve.

In the process of negotiation, however, the goal of consensus should not be used to impede progress on a progressive text. Consensus does not imply a veto power of every participant at every step – and I invoke here the terminology of veto used to raise fears of impediments to progress in other contexts. Consensus does not mean perfect unanimity of opinion nor bowing to the lowest common denominator. It means coming together in a spirit mutual understanding and common purpose to build and settle upon common ground. I sincerely believe it is possible to reach much common ground among the indigenous peoples and states represented here, including those states that voted against or abstained on the UN declaration. It should be recalled that upon explaining their votes at the United Nations, each of these states expressed strong commitment to indigenous peoples' rights in general, while directing their objections to particular provisions of the declaration. No state rejected the core principles that are found in the UN declaration beneath the wording employed in its text. And I believe it is possible that the views of states that once opposed the UN declaration are evolving toward the majority position, as greater understanding about the importance and meaning of the declaration emerges. I note with satisfaction that just recently the House of Commons of the Canadian Parliament voted to endorse the UN declaration and called upon the Canadian executive authorities to act in conformity with the declaration. I look forward to further such evolution among state policies, in accordance with global trends.

If one examines the record of proceedings in the negotiations thus far, one can see plenty of disagreement about the text. This divergence of views is clearly evident in documents prepared for this session. On the other hand, if one looks carefully at the same record of proceedings, in conjunction with the policies, laws, and constitutional reforms that have been adopted by states throughout the region, one can see plenty of common ground. There is common ground on core principles of equality, self-determination, cultural integrity, rights over lands and resources, and related norms; and common ground on the obligation of states to take measures to ensure the rights of indigenous peoples in accordance with these principles. I cannot help but think that a useful exercise would be to take stock of this common ground and to reflect on the opportunities it presents for these deliberations. With that common ground in mind, a common purpose, and an appreciation of the common bonds of humanity that unite us all, I believe that within reach is an American declaration that will justly and appropriately complement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, for the benefit of both states and indigenous peoples of this great region of the world.

Muchas gracias Sr. Presidente.

**DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EN TORNO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

Reconociendo que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas, incluyendo el despojo de sus tierras y recursos, la asimilación forzada y la discriminación sistemática;

Acogiendo con agrado los continuos esfuerzos de los pueblos indígenas para promover la mejora de su entorno político, económico y social y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión, dondequiera que éstas ocurran;

Por la presente afirmamos nuestro compromiso con los siguientes principios y nuestra determinación para trabajar por su pleno cumplimiento en todo el mundo:

1. Los individuos, tanto indígenas como no indígenas, tienen derecho a la igualdad de protección ante la ley. Los Estados deberían tomar medidas para combatir la discriminación contra individuos y pueblos indígenas y para promover la tolerancia, el respeto, el entendimiento y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y los demás sectores de la sociedad.

2. Además de cumplir con las obligaciones existentes en materia de derechos humanos con relación a los individuos indígenas, los Estados deberían reconocer otros derechos colectivos de los pueblos indígenas, que promuevan su dignidad, bienestar y desarrollo y que preserven su cultura.

3. Los Estados deberían reconocer, por ejemplo, que los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a la autodeterminación dentro de las naciones en las que residen. Esto significa el derecho al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, tales como, cultura, idioma, religión, educación, información, bienestar social, mantenimiento de la seguridad de la comunidad, relaciones familiares, actividades económicas, gestión de tierras y recursos, medio ambiente, determinación de la pertenencia al grupo, e ingreso de aquellos que no pertenecen, así como medios y arbitrios para la financiación de estas funciones. Puesto que los pueblos indígenas ejercen su derecho colectivo al autogobierno, los Estados deberían tener relaciones políticas formales con los pueblos indígenas que residen dentro de sus países.

4. En el ejercicio de este autogobierno dentro del marco legal nacional, los pueblos indígenas deberían tener el derecho colectivo a promover, desarrollar y mantener sus propias estructuras institucionales y sus propias costumbres, su espiritualidad, tradiciones, procedimientos y prácticas y sistemas jurídicos.

5. Los pueblos indígenas deberían tener el derecho colectivo a las tierras que poseen o que ocupan, incluyendo los recursos del subsuelo. Los Estados deberían reconocer legalmente tales tierras y recursos, y este reconocimiento debería realizarse con el debido respeto a las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de tierras de los pueblos indígenas.

6. Los pueblos indígenas no deberían ser objeto de la asimilación forzada ni la destrucción de su cultura.

7. Antes de aprobar leyes o medidas administrativas que puedan afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas, los Estados deberían consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas afectados.

8. Los pueblos indígenas deberían mantener, proteger y tener acceso a sus lugares religiosos y culturales y tener el derecho colectivo a la repatriación de sus restos humanos, objetos ceremoniales y patrimonio cultural.

9. Los Estados deberían prestar asistencia financiera y técnica a los pueblos indígenas que residen en sus países y en todo el mundo.

10. En el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, deben respetarse los derechos humanos de todos, y los pueblos indígenas deberían estar sujetos solamente a las limitaciones determinadas por la ley, únicamente con el propósito de asegurar el debido reconocimiento y respeto por los derechos y libertades de otros y de cumplir con las necesidades legítimas del orden público y el bienestar general de una sociedad democrática.

DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

Onceava Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Los Estados Unidos se reservan su posición sobre el texto final bajo discusión y no se une a ningún texto que pueda ser aprobado o aparecer en el texto de trabajo de la Presidencia para la Onceava Reunión del Grupo de Trabajo.

**STATEMENT OF PRINCIPLES OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES**

Recognizing that indigenous peoples have suffered from historic injustices, including dispossession of lands and resources, forced assimilation, and systematic discrimination,

Welcoming ongoing efforts by indigenous peoples to promote their political, economic, social, and cultural enhancement and in order to bring an end to all forms of discrimination and oppression wherever they occur,

We hereby pledge our commitment to the following principles and our determination to work for their full implementation throughout the world:

1. Indigenous individuals and non-indigenous individuals are entitled to equal protection under law. States should take measures to combat discrimination against indigenous individuals and peoples and to promote tolerance, respect, understanding and good relations among indigenous peoples and all other segments of society.
2. In addition to implementing existing human rights obligations with respect to indigenous individuals, States should recognize additional, collective rights of indigenous peoples, which promote their dignity, well being, and development and preservation of their cultures.
3. States should recognize, for example, that indigenous peoples have the collective right to self-determination within the nations in which they reside. This means the right to self-government in matters relating to their internal and local affairs, including culture, language, religion, education, information, social welfare, maintenance of community safety, family relations, economic activities, lands and resources management, environment, determination of membership, and entry by non-members as well as ways and means for financing these functions. As indigenous peoples exercise their collective right to self-government, states should maintain formal, political relationships with indigenous peoples residing within their countries.
4. In the exercise of this self-governance within the national legal framework, indigenous peoples should have the collective right to promote, develop, and maintain their own institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures and practices, and legal systems.
5. Indigenous peoples should have the collective right to lands that they own or occupy, including sub-surface resources. States should give legal recognition to such lands and resources and this recognition should be conducted with due respect to the customs, traditions, and land tenure systems of indigenous peoples.
6. Indigenous peoples should not be subjected to forced assimilation or destruction of their culture.
7. Before adopting legislation or administrative measures that would directly affect the rights of indigenous peoples, States should consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned.

8. Indigenous peoples should be able to maintain, protect, and have access to their religious and cultural sites and should have the collective right to repatriation of their human remains, ceremonial objects and cultural patrimony.

9. States should provide financial and technical assistance to indigenous peoples residing within their countries and throughout the world.

10. In the exercise of collective rights by indigenous peoples, the human rights of all shall be respected and indigenous peoples should be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of public order and general welfare in a democratic society.

STATEMENT OF THE UNITED STATES

11th Meeting of Negotiations in the Quest for Points of Consensus on the draft Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

The United States is reserving its position on the final text under discussion and does not join in any text that might be approved or otherwise appear in the Chair's rolling text for the 11th meeting of the Working Group.

**COMUNICACIÓN DE CANADÁ AL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE
ELABORAR UN PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
14 de abril de 2008**

Canadá ha sido un participante activo en las negociaciones del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde que comenzó el proceso en 1997. Hemos trabajado por un texto fuerte y eficaz que pueda dar orientación práctica a los Estados. A través de este proceso, los Estados deberían adoptar compromisos que estén dispuestos a asumir y tengan la capacidad de llevar a la práctica. Los antecedentes suministrados por el compendio de propuestas hechas en el curso de los años demuestran las contribuciones que hemos hecho para alcanzar esta meta.

En la última sesión de negociaciones, Canadá propuso un nuevo enfoque con el objeto de encontrar una base común. Específicamente, propusimos que la labor del Grupo de Trabajo cambiara en forma fundamental – que en vez de negociar un texto específico, exploráramos en detalle las cuestiones subyacentes de la discusión, entre otras cosas, prácticas, políticas, y experiencias pertinentes de indígenas y el Estado. Subrayamos el hecho que Canadá no podía aceptar el texto de la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* (A/RES/61/295) como el punto de partida o resultado mínimo para negociaciones ulteriores. También dejamos claro que si el logro de un verdadero consenso no era nuestra meta común, entonces Canadá tendría que reexaminar fundamentalmente su participación y su apoyo a las negociaciones futuras.

Lamentablemente, las negociaciones de este Grupo de Trabajo continúan avanzando en una dirección que Canadá no puede apoyar. Ha quedado claro que muchos Estados de la OEA y el Cónclave indígena desean usar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como punto de partida y base para las negociaciones futuras sobre tópicos respecto a los cuales no se ha alcanzado un consenso en el Grupo de Trabajo. No obstante, la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas no fue apoyada universalmente por los Estados Miembros de la OEA.

A objeto de permitir que otros procedan con las negociaciones de una declaración de la OEA, desde ahora en adelante, Canadá desempeñará un papel diferente. Oficialmente reservamos nuestra posición sobre el texto final que se está negociando. No seguiremos negociando activamente ni presentaremos mociones sobre el texto. Sin embargo, continuaremos asistiendo y ocasionalmente haremos uso de la palabra sobre la experiencia y las perspectivas canadienses.

No es nuestra intención obstaculizar el camino e impedir que otros avancen. Si de este proceso llegara a surgir un documento final, Canadá lo estudiará cuidadosamente. Si el documento final no aborda adecuadamente las preocupaciones de Canadá, no podremos darle nuestro apoyo. No obstante, en ese caso, Canadá no tiene la intención de bloquear el consenso, siempre que el documento adoptado señale claramente que Canadá no dio su apoyo y se entienda explícitamente que, por lo tanto, el texto de la Declaración no se aplica a Canadá.

Independientemente de nuestra posición respecto a este proceso, Canadá continuará tomando medidas eficaces, a nivel nacional e internacional, a fin de promover y proteger los

derechos de los pueblos indígenas basándonos en nuestros actuales compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos.

**CANADA'S STATEMENT TO THE WORKING GROUP TO PREPARE THE DRAFT
AMERICAN DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES
APRIL 14, 2008**

Canada has been an active participant in the negotiations of the draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples since the process began in 1997. We have worked towards a strong, effective text that could provide practical guidance to States. The commitments that States undertake through this process should be ones that they are willing and able to assume. The record provided by the compendium of proposals over the years demonstrates the contributions we have made towards this goal.

At the last negotiating session, Canada proposed a new approach to finding common ground. Specifically, we proposed that the focus of the Working Group undergo a fundamental shift – a shift from negotiating specific text to exploring in detail the underlying issues through discussion of, among other things, relevant State and indigenous experiences, practices and policies. We underlined the fact that Canada could not accept the text of the *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (A/RES/61/295) as the starting point or minimum outcome for further negotiations. We also made it clear that if true consensus was not our shared goal, then Canada would have to fundamentally review its participation in, and support for, future negotiations.

Regrettably, the negotiations of this Working Group continue to move in a direction that Canada cannot support. It has become clear that there is a strong desire among many OAS States and the Indigenous Caucus to use the *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* as the baseline or starting point for future negotiations on topics for which no consensus has been reached within this Working Group. However, the adoption of the United Nations Declaration was not universally supported by OAS Member States.

In the interest of allowing others to proceed with the negotiations of an OAS declaration, from this point forward, Canada will be playing a different role. We are formally reserving our position on the final text under negotiation. We will no longer actively negotiate or table text. We will, however, continue to be present and will occasionally speak about Canadian experience and perspectives.

It is not our intention to stand in the way of others moving in the direction they wish. If and when a final document emerges from this process, Canada will consider it carefully. If the final document does not adequately address Canada's concerns, we will not be able to support it. However, in that case, Canada would not intend on blocking consensus, as long as the document adopted clearly indicated that Canada did not give its support and as long as there was an explicit understanding that the Declaration text therefore did not apply to Canada.

Regardless of our position on this process, Canada will continue to take effective action, at home and abroad, to promote and protect the rights of indigenous peoples based on our existing human rights obligations and commitments.

**ANUNCIO DEL PROYECTO AMAUTA
TO THE AMERICAN INDIGENOUS CAUCUS**

Dr. Michel Bergeron, Director
Dep. de Ciencia y Tecnología
OEA, Washington, 15 de abril 2008

Good morning to all of you,
Distinguished participants to this important caucus,
Bonjour à tous les distingués délégués,
KAMISAKI, IMAINAYA,
Bom dia a todos, Buenos dias a todos,

Es realmente un placer para mi estar aquí con Ustedes, los pilares de nuestra civilización en las Américas, y poder compartirles el proyecto que el departamento de Ciencia y Tecnología, junto con el Embajador Cuadros de la Misión de Bolivia esta desarrollando en Bolivia, para que la riqueza de sus comunidades rurales, especialmente de los Aymaras y Quechuas, sirva para crear nuevas fábricas, innovar las tecnologías para aprovechar nuevas fuentes de energía y sobre todo para el bien vivir de los hombres y mujeres nobles que viven en esa región.

El proyecto es en el Salar de Uyuni, en donde viven los aymaras, un grupo que posee una gran riqueza, el Litio, que no ha sido explotada todavía en beneficio de las almas buenas. El proyecto llamado Amauta es la creación de un instituto de investigación básica y aplicada e innovación en cuatro áreas:

- Energías limpias renovables y minerales estratégicos
- Tecnologías de la información
- Estudios antropológicos
- Medio ambiente, recursos naturales y ecoturismo.

Así, el salar de Uyuni será el laboratorio más grande del planeta en energías renovables, y permitirá la investigación y la explotación de la energía solar, la energía de los géiseres y volcanes, la del viento, el litio y otras más.

El proyecto Amauta será para Bolivia el principio del viaje que llevará a esta valiente nación desde su status de país pre-industrializado al de país post-industrializado, sin pagar los grandes costos sociales y ecológicos que han pagado los países industrializados y con mayores beneficios que ellos.

Todo esto en cumplimiento de los mandatos de la declaración de Panamá en lo concerniente a Energía para el Desarrollo sustentable, que dice a la letra:

Reconocer la importancia fundamental que tiene para los estados miembros la disponibilidad de recursos energéticos para la promoción de su desarrollo económico y social, de forma ambientalmente sostenible.

AS the Secretary General, His Excellency José Miguel Insulza keeps repeating: our first mandate at the OAS is to create jobs and to alleviate poverty. The presence of extreme poverty in our Hemisphere is a scandal of our modern democracies.

Reconocer la necesidad de obtener y utilizar todas las formas de energía que estén en armonía con la vida y la naturaleza, preservando el aire, el agua y la tierra, que proveen el alimento y el hábitat indispensable para todos los seres vivientes, procurando su asequibilidad para las poblaciones mas vulnerables, de manera consistente con una sensibilidad social y ambiental.

Sabemos que tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas, de su cultura basada en la armonía del hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre y es por ellos que estamos consciente de que solo trabajando juntos seremos capaces de utilizar los recursos naturales para el bienestar de los pueblos, y de la madre tierra.

Monsieur l'Ambassadeur Cuadros, veuillez transmettre à votre gouvernement, et partager vous-même, notre forte intention de vous appuyer concrètement dans ce projet Amauta. L'OÉA et son département de Science et de technologie compte vous accompagner sur cette longue route. Soyez assuré de notre fidélité pour le plus grand VIVIR BIEN de tous les citoyens et citoyennes de Bolivie et des Amériques.

**GRUPO DE TRABAJO PARA PREPARAR EL PROYECTO DE DECLARACIÓN
AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

**LAS POSICIONES DE CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS QUE MANIFIESTAN
RESERVAS Y OPONEN EL CONSENSO SON INACEPTABLES**

**RESPUESTA DEL CÓNCLAVE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS
15 DE ABRIL DEL 2008**

El Cónclave de los Pueblos Indígenas solicita cordialmente que la siguiente intervención sea incluida como parte del registro oficial de esta reunión.

La Organización de Estados Americanos (OEA) es una agencia regional vital, comprometida a los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. El sistema inter-americano de derechos humanos goza de una fuerte tradición e historia de iniciativas progresivas para promover y proteger los derechos humanos. Los Pueblos Indígenas de las Américas han reafirmado constantemente su apoyo a la OEA. Este Grupo de Trabajo fue creado por la Asamblea General de la OEA y su mandato y su proceso deben ser respetados por todos los participantes.

El 13 de septiembre del 2007, la Asamblea General de la ONU votó y aprobó con una inmensa mayoría la *Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. De los 35 Estados en las Américas, solo Canadá y Estados Unidos votaron en contra.

La *Declaración de la ONU* es instrumento universal de derechos humanos. El Artículo 43 afirma que “Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.” Este Artículo fue aceptado para adopción provisional por todos los Estados y Pueblos Indígenas en el establecimiento de normas de la ONU, incluyendo Canadá y Estados Unidos.

En la Reunión de Reflexión de la OEA en Noviembre del 2007 en Washington D.C., Canadá planteó que “El Gobierno de Canadá no puede aceptar que el Texto de la Declaración de la ONU sea el punto de partida o resultado mínimo para esas negociaciones [Sobre un proyecto de Declaración Americana]. El intento de imponer el texto de la Declaración de la ONU condena esas negociaciones al fracaso.” A pesar de esta intervención la mayoría de los Estados Americanos en la Reunión optaron por reafirmar sus compromisos internacionales con el fin de seguir negociando el proyecto de Declaración Americana.

En la intervención presentada el 14 de Abril del 2008, Canadá reiteró su objeción y además indicó que trataría de bloquear el consenso si no se cumpliera con los siguientes requisitos: “el documento adoptado indicaría que Canadá no dio su apoyo” y que la Declaración incluyera “Un entendimiento explícito que el texto de la Declaración no aplicaría a Canadá”

Estas condiciones son inconsistentes con el estado de derecho, el derecho internacional y el antecedente nacional en Canadá y son, por esta razón, inapropiados, inaceptables y discriminatorios. En sus fallos sobre Derechos Humanos, las cortes de Canadá tienen libertad para invocar y fundamentarse en una serie de instrumentos internacionales, incluyendo

declaraciones. De hecho, Canadá esta solicitando que la OEA altere el estado de derecho dentro de un Estado Miembro.

Además, Canadá busca establecer un antecedente peligroso dentro de la OEA. Es decir, propone que cualquier Estado que quiere oponerse a la adopción de cualquier declaración dentro del sistema interamericano, podría simplemente oponerse y de esta manera evitar su aplicación nacional. Esto socavaría totalmente el principio de la cooperación internacional que es un elemento Fundamental de la *Carta Magna de la ONU* y la *Carta Magna de la OEA*. También socavaría la evolución progresiva de los derechos humanos en el hemisferio.

Dentro de la OEA, la búsqueda de consensos es el procedimiento preferido. Sin embargo, bloquear el consenso no puede ser aprovechado por parte de cualquier Estado miembro como un derecho a veto para imponer medidas regresivas. Sería abusivo que un Estado miembro bloqueara el consenso sobre el proyecto de Declaración Americana, para tratar a persuadir a otros Estados a abandonar sus compromisos en mantener los estándares mínimos de la *Declaración de la ONU*.

Cabe señalar que la minoría del gobierno de Canadá está desafiando una Moción adoptada el 8 de abril del 2008 en el Parlamento Canadiense. La Moción plantea:

Que el gobierno avala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Setiembre del 2007 y que el Parlamento y el Gobierno apliquen los estándares contenidos en la misma.

Con todo respeto, instamos a la OEA y sus Estados miembros a negar apoyar las acciones no democráticas del gobierno canadiense. Como afirma la *Carta Democrática Interamericana*. “Los Pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defenderla.”.

El Cónclave de los Pueblos Indígenas también toma nota que la posición de los Estados Unidos ha deteriorado de la reserva general expresada en la décima sesión de negociación celebrada en abril de 2007 en Bolivia. En aquel entonces, los EEUU indicó que informaría en una fecha posterior si podría aceptar o no los resultados de la sesión, pero nunca lo hizo.

Hoy, los Estados Unidos tomó la palabra y no solamente reservó su posición sobre el texto final, pero informó también que “no se sumara a cualquier texto que se puede aprobar o proponer en el texto del Presidente” como resultado de la 11va sesión y que se reserve su posición sobre el texto final. La negación de los EEUU a participar de una forma constructiva en el proceso de negociaciones viola su deber a consultar con las naciones indígenas soberanas y cumplir con sus obligaciones bajo los tratados con estas naciones indígenas.

El Cónclave de los Pueblos Indígenas de las Américas lamenta que Canadá y los Estados Unidos siguen irrespetando este proceso y los derechos humanos de los pueblos indígenas lo cual pone en peligro lo que hemos logrado hasta la fecha. En este sentido, las posiciones de poner “reservas” por parte de estos dos Estados, constituye un veto anticipado sobre el consenso que estamos construyendo con la gran mayoría de Estados y representantes de los Pueblos Indígenas para que el Proyecto de la Declaración Americana sea consistente con la *Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*.

Los Pueblos Indígenas que participan en este proceso hacen un llamado a Canadá y los Estados Unidos a retirar sus reservas para no bloquear el consenso y tener una actitud constructiva para asegurar la aprobación oportuna de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que reconozca nuestros derechos humanos fundamentales. Deben respetar los principios subyacentes de la cooperación internacional y solidaridad de la OEA.

Esperamos trabajar con todos los Estados para adoptar una Declaración fuerte y contundente que responda a las aspiraciones y necesidades de los Pueblos Indígenas de las Américas.

**WORKING GROUP TO PREPARE THE DRAFT AMERICAN DECLARATION ON
THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES**

**THE POSITIONS OF CANADA AND THE UNITED STATES EXPRESSING
RESERVATIONS AND OPPOSING CONSENSUS ARE UNACCEPTABLE**

**RESPONSE OF THE INDIGENOUS PEOPLES' CAUCUS OF THE AMERICAS
APRIL 15, 2008**

The Indigenous Peoples' Caucus kindly requests that the following Statement be included as part of the official record of this meeting.

The Organization of American States (OAS) is a vital regional agency committed to the Purposes and Principles of the United Nations. The Inter-American human rights system has a strong tradition and record of progressive action in relation to the promotion and protection of human rights. Indigenous peoples in the Americas have repeatedly reaffirmed their support for the OAS. This Working Group was created by the OAS General Assembly and its mandate and process must be respected by all participants.

In a historic vote on September 13, 2007, the UN General Assembly overwhelmingly adopted the *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Of the 35 States in the Americas, only Canada and the United States voted against.

The *UN Declaration* is a universal human rights instrument. Article 43 affirms that the "rights recognized herein constitute the minimum standards for the survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world". This Article was accepted for provisional adoption by all States and Indigenous peoples in the UN standard-setting process, including Canada and the United States.

At the OAS Meeting of Reflection in November 2007 in Washington, D.C., Canada stated that the "Government of Canada cannot accept the UN Declaration text as the starting point or minimum outcome for these negotiations [on a draft American Declaration]. Trying to impose the UN Declaration text will doom these negotiations to failure." Notwithstanding this statement, most other American States at the November Meeting chose to reaffirm their international commitments and take further consistent steps in negotiating a draft American Declaration.

In its April 14, 2008 Statement to the Working Group, Canada expressed a similar objection. Canada went further, however, and indicated that it would attempt to block consensus, unless the following two conditions were met: "the document adopted clearly indicated that Canada did not give its support" and the Declaration included "an explicit understanding that the Declaration text therefore did not apply to Canada."

These conditions are inconsistent with the rule of law, international practice and domestic precedent within Canada and are, therefore, inappropriate, unacceptable and discriminatory. In interpreting human rights, Canadian courts are free to invoke and often rely upon a wide range of international instruments, including declarations. In effect, Canada is requesting the OAS to alter the rule of law within a member State.

In addition, Canada is seeking to create a dangerous precedent within the OAS. That is, any State that chooses to oppose the adoption of any declaration within the Inter-American system could simply opt to oppose it and prevent its domestic application. This would severely undermine the principle of international cooperation that is a crucial element of the *UN Charter* and the *OAS Charter*. It would also undermine the progressive development of human rights within the Hemisphere.

Within the OAS, the quest for consensus is the preferred course of action. However, consensus cannot be used as a veto by any member State to insist on regressive measures. It would be an abuse for a State to prevent consensus on a draft American Declaration, in an attempt to compel other States to abandon their solemn commitments in upholding the “minimum standards” in the *UN Declaration*.

Notably, the minority government of Canada is defying a Motion adopted on April 8, 2008 in the Canadian Parliament. This Motion states:

That the government endorse the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as adopted by the United Nations General Assembly on 13 September 2007 and that Parliament and Government of Canada fully implement the standards contained therein.

We respectfully urge the OAS and its member States to reject the undemocratic actions of the Canadian government. As affirmed in the *Inter-American Democratic Charter*: “The peoples of the Americas have a right to democracy and their governments have an obligation to promote and defend it.”

The Indigenous Peoples’ Caucus also notes that the United States’ position has deteriorated from the general reservation which it took at the tenth negotiation session in April 2007 in Bolivia. The US indicated there that it would later inform the Working Group whether the US could accept the results of that session. This was never done.

Today, the United States made a statement on the floor that it would “not join in any text that might be approved or otherwise appear in the Chair’s rolling text” as a result of this 11th negotiation session and it would reserve its position on the final text. The refusal of the United States to constructively engage in this negotiations process violates its duty to consult with sovereign Indigenous nations and to uphold its obligations under treaties it has made with Indigenous nations.

The Indigenous Peoples’ Caucus of the Americas regrets that Canada and the United States are continuing to disrespect this process and the human rights of Indigenous peoples, which places what we have achieved to date in this process at great risk. These two States with their positions of “reservations” constitute a pre-emptive veto on the consensus that we are building with the great majority of States and representatives of Indigenous peoples for a draft American Declaration that is consistent with the *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.

The Indigenous peoples participating in this process call upon Canada and the United States to withdraw their reservations, to not block consensus, and adopt a constructive attitude to ensure the timely adoption of the American Declaration that reflects in a true and effective manner our human rights. They must respect the principles of international cooperation and solidarity that underlie the Organization of American States.

We look forward to working with all States and adopt a strong and effective Declaration that responds to the aspirations and needs of the Indigenous peoples of the Americas.

**WORKING GROUP TO PREPARE THE DRAFT AMERICAN DECLARATION ON
THE
RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES**

**INDIGENOUS AMERICANS OF ANASAZI HERITAGE RESPONSE TO THE
UNITED STATES STATEMENT OF PRINCIPLES AND FACTS ON THE RIGHTS
OF INDIGENOUS PEOPLES**

The Foundation for Indigenous Americans of Anasazi Heritage represents Indigenous American people born from Anasazi Women, ethnically identified as American Indian women-renamed by the English as American Negro's since 1706.

The Foundation would like to give clarity on statements presented by the United States as Principles of the United States on the Rights of Indigenous Peoples and facts about the U.S relations with their designated U.S Federally Recognized Tribes, representing the U.S long standing policy's of good will towards the Indigenous American Peoples.

The Foundation is compelled to clarify the difference between Native Americans for the United States and the race of Indigenous Americans living in the U.S.

We find the blatant mis-representation of Indigenous Americans as federally recognized tribes a deceitful maneuver to mislead the International Community and cover up the systematic racism and human rights violations being committed against the race of Indigenous Americans living within the U.S.

The United States Federal Tribal recognition is based on family groups of people who are descendants of Indigenous American men with non indigenous women. The U.S policy since 1912 towards the status of Native American is: a person should consist of no more than 16% indigenous blood, a person with a stronger connection to indigenous American heritage are considered Negro/black Americans, this is not the international definition for indigenous persons or collectives.

Federal recognized tribes represents small minority groups of non-indigenous or multiethnic peoples who the U.S have chosen to be allowed to live- some on reservations and claim the indigenous ancestral American identities and culture. The U.S has used semantics with the words of Native American and American Indians, words technically belonging to the indigenous race of Americans and has applied them to European heritage groups of people the U.S selects.

The blatant mis-use of the terminology for the ethnic identity "American Indian" being applied to U.S. federally recognized Indian tribes, allows any group of people with the status of "tribe", to have the status of federally recognized tribe to day and can lose the status to become extinct tomorrow depending on how the U.S chooses to use the lands and resources the federally recognized tribe

has been allowed to have stewardship over. The tribe will be subject to the limitations of domestic law solely for the purpose of securing the implementation of their rights and freedoms of corporate interest, which will have precedence over the general welfare, and privileges promoted as rights granted to the U.S. federally recognized tribe status.

In addition, the people born from indigenous American women are automatically naturalized as U.S. citizens and placed under the artificial identity of Negro Americans.

Since 1868 the U.S. has controlled the land Trust consisting of 700 million acres of land belonging to the Indigenous American race of people from the collective inheritance belonging to the indigenous American Indian women placed under the identity of Negro, known as the Public Land Trust, in effect placed indigenous Americans as domestic dependants/subjects under U.S. domestic policy and law.

As naturalized (subjects) citizens for the United States, the indigenous American Indians are allowed the privilege to vote, while being denied their basic human rights, and fundamental inherited right to self-determination, self-sufficiency, culture, language, spirituality, education, social welfare, family development and relations, land resources, collective wealth, while the U.S. implements policies to undermine their collective means to develop and maintain their collective wealth as a way of means to stop their collective poverty.

However, a small percentage of American Indians as Negro individuals have attained as public citizens, jobs as positions with the U.S. government in local, state and federal agencies, government-funded assimilation programs and educational institutions, or as entertainers like Michael Jackson or athletes like Michael Jordan. However, the larger collective of Indigenous Americans live below the minimum standard for survival, dignity, and wellbeing, as the collective condition of life in their homeland America under U.S. jurisdiction.

Dr. Martin Luther King made reference to his indigenous American heritage and the frustration of his subjugation from his artificial citizenship with the United States in his historic speech "I have a Dream." He states: "One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. So we have come here today to dramatize a shameful condition."

The U.S. disingenuously attempts to apply policies towards federally recognized tribes as representing U.S. policies towards Indigenous Americans will allow the U.S. to maintain the invisibility and domestic subject status the U.S. has placed on 36 million Indigenous Americans and eliminate their fundamental human rights under all international declarations, conventions, and resolutions and treaties.